

# **DESARROLLO DE COMPETENCIAS AVANZADAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

## **UNIDAD 3**

---

**Las autoridades de supervisión. El Comité  
Europeo de Protección de Datos. El régimen  
sancionador en el RGPD**

## CONTENIDOS

NOTA ACLARATORIA.....	3
1. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) .....	4
1.1 NATURALEZA JURÍDICA .....	4
1.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.....	4
1.3 ESTRUCTURA Y FUNCIONES .....	5
1.4 FUNCIONES Y POTESTADES DE LA AEPD.....	8
1.5 RECLAMACIONES ANTE LA AEPD .....	11
2. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS (CTPTA) .....	14
3. EL COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS .....	20
3.1 NATURALEZA Y COMPOSICIÓN .....	20
3.2 FUNCIONAMIENTO .....	21
3.3 FUNCIONES .....	22
4. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL RGPD .....	27
4.1 INTRODUCCIÓN.....	27
4.2 INFRACCIONES Y SANCIONES.....	27
4.3 PODERES CORRECTIVOS DE LA AUTORIDAD DE CONTROL.....	33
4.4 EL RÉGIMEN SANCIONADOR PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	34



Este curso ha sido cedido por la Agencia Española de Protección de Datos por medio de una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir igual, en los términos que se describen en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es> o texto oficial que, para esta modalidad de licencia, sustituya al indicado.

## NOTA ACLARATORIA

La aplicación efectiva del RGPD, en particular los aspectos relacionados con los poderes de investigación de las autoridades de control, el régimen sancionador y el procedimiento para los casos de su vulneración hacen necesaria la adaptación del marco normativo interno. Con esta finalidad se aprobó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo, LOPDGDD), que incluye estos aspectos además de otros también necesitados de desarrollo obligatorio, como la edad de los menores para prestar el consentimiento, o voluntario, como los códigos de conducta.

Al no haberse aprobado la Ley Orgánica se hizo necesario y urgente la regulación de las materias indicadas a través de un Real Decreto-Ley, en concreto el 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos (BOE, de 30 de julio), que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 6 de septiembre y ha sido derogado expresamente por la Disposición derogatoria única de la LOPDGDD.

## 1. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)

### 1.1. NATURALEZA JURÍDICA

El artículo 51 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) estipula que cada Estado miembro establecerá que una, o varias, autoridades públicas independientes (denominadas autoridades de control) supervisen su aplicación con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la UE. Previsión que ya contenía la Directiva 95/46, precedente del RGPD, en su artículo 28, en el que se subrayaba que dichas autoridades ejercerán las funciones que le son atribuidas con total independencia.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la **autoridad de control independiente** que vela por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. En desarrollo del artículo 51 del RGPD, la LOPDGDD establece que “la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones”, y se rige por lo dispuesto en la propia LOPDGDD y en su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 428/1993, en desarrollo de la primera Ley de Protección de Datos, conocida como la LORTAD, en lo que no contradiga, se oponga o resulte incompatible con lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD.

Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la LRJSP es “Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa independiente” y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

Además, y en virtud de la previsión contenida en el artículo 57 de la LOPDGDD, existen las autoridades de control autonómicas que ejercen sus funciones en relación con su respectivo sector público y que son la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La LOPDGDD indica que la AEPD tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos.

### 1.2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

La LOPDGDD establece que la AEPD se rige por lo dispuesto en el RGPD, la propia LOPDGDD y sus disposiciones de desarrollo. Y señala que el Gobierno aprobará su estatuto a propuesta de la propia AEPD mediante real decreto.

En concreto, se puede establecer el régimen jurídico de los diferentes ámbitos de actuación de la AEPD en los siguientes términos:

- En el ejercicio de sus funciones públicas, se rige supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de la LOPDGDD, por las normas citadas en el artículo 110.1 de la LRJSP.
- En materia de contratación se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público.
- En cuanto al personal, los puestos de trabajo son desempeñados por funcionarios o por personal laboral, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. El régimen del

personal que presta servicios en la AEPD será el previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral y el Convenio Único para el personal laboral de la AGE.

- La AEPD elabora y aprueba su presupuesto y lo remite al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
- Para el cumplimiento de sus fines dispone de las asignaciones presupuestarias, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos, ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecidas en el artículo 58 del RGPD.
- En lo relativo al control de las actividades económicas y financieras de la Agencia, el control externo lo ejerce el Tribunal de Cuentas y el interno la Intervención General de la Administración del Estado.
- La contabilidad de la Agencia se ajusta al Plan General de Contabilidad Pública.

### 1.3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES

#### CARÁCTER DE AUTORIDAD INDEPENDIENTE

Un aspecto capital de la AEPD es el de su independencia, tal y como se viene reconociendo en toda la normativa: la Directiva 95/46, la LOPD, el RGPD y la LOPDGDD.

Para ello, el RGPD estipula en su artículo 52 que el miembro o los miembros de cada autoridad de control serán ajenos en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes a toda influencia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni admitirán ninguna instrucción. Se abstendrán de cualquier acción incompatible con sus funciones, ni participarán en actividad profesional, remunerada o no, que resulte incompatible.

#### ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA

##### 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto

De conformidad con el artículo 48 de la LOPDGDD, la Presidencia de la AEPD la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices.

La Presidencia de la AEPD estará auxiliada por un Adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el Título VIII de la LOPDGDD, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.

Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

La Presidencia de la AEPD y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

El RGPD añade que poseerá la titulación, la experiencia y las aptitudes, en particular en el ámbito de la protección de datos, necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus poderes

Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido éste, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos.

Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse ésta, por mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de Diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes.

La Presidencia y el Adjunto de la AEPD serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto.

El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la AEPD tiene una duración de **cinco años** y puede ser renovado para otro período de igual duración.

La Presidencia y el Adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros, por:

- Incumplimiento grave de sus obligaciones,
- incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función,
- incompatibilidad, o
- condena firme por delito doloso.

En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías parlamentarias previstas para ratificar la propuesta de Presidencia y Adjunto.

Los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la AEPD ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional.

## 2. El Consejo Consultivo

La LOPDGDD establece un órgano colegiado, el Consejo Consultivo, que ya existía bajo la normativa anterior, que asesora a la Presidencia de la AEPD, emite informe sobre las cuestiones que ésta le someta y podrá formular propuestas sobre temas relacionados con las materias de competencia de la AEPD.

La composición del Consejo es la siguiente:

- Un Diputado.
- Un Senador.
- Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial
- Un representante de la Administración General de del Estado, con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia.
- Un representante de cada Comunidad Autónoma con Autoridad propia de Protección de Datos. Recae en los directores de las Agencias Autonómicas.
- Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios
- Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.



- Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
- Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V, propuesto por el Ministerio de Justicia.
- Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
- Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, Superiores y Colegiados Profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministerio de Justicia.
- Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
- Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas.

La LOPDGDD ha ampliado y modificado su composición al suprimir el vocal propuesto por la Real Academia de la Historia y al representante del sector de ficheros de titularidad privada, propuesto por el Consejo Superior de Cámaras, e incorporar como nuevos miembros, entre otros, a:

- Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.
- Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
- Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V (“Códigos de conducta y certificación”), propuesto por el Ministro de Justicia.
- Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
- Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas.

La condición de experto se deberá justificar mediante la acreditación de conocimientos especializados en el Derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico.

Los miembros del Consejo Consultivo son nombrados por orden del Ministerio de Justicia, publicada en el BOE, y sus decisiones no tienen carácter vinculante.

La LOPDGDD establece que el Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la AEPD y, en todo caso, una vez al semestre.

Las normas relativas a la Presidencia y Adjunto y al Consejo Consultivo se aplicarán una vez expire el mandato de la actual directora de la AEPD, que fue nombrada por un periodo de cuatro años.

Según establecía la derogada LOPD, el director dirige la Agencia y ostenta su representación.

El actual estatuto de la AEPD, que continúa vigente en lo que no se oponga al Título VIII de la LOPDGDD, establece una estructura basada en 3 órganos: el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Secretaría General, que se ve afectada por las novedades introducidas por el RGPD, como la

supresión de la obligación de registrar los ficheros, y que, en consecuencia, habrá de replantearse en el estatuto de la AEPD que se acabe adoptando.

Además, la AEPD cuenta con una Unidad de Apoyo al director, un Gabinete Jurídico, un Departamento de Relaciones Internacionales y una Unidad de Estudios y Evaluación Tecnológica.

## 1.4. FUNCIONES Y POTESTADES DE LA AEPD

Con la finalidad de supervisar la aplicación del RGPD, éste atribuye a las autoridades de control, y por tanto a la AEPD, un elenco de funciones y de potestades en sus artículos 57 y 58, respectivamente, que conforman sus competencias y que tienen su reflejo en las funciones previstas en el artículo 37 de la LOPD.

**Las funciones que el RGPD atribuye a las autoridades de control, y por tanto a la AEPD, son:**

- Controlar su aplicación del RGPD y hacerlo aplicar;
- Promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento de datos. Debiendo prestar especial atención a las actividades dirigidas específicamente a los niños;
- Asesorar, con arreglo al Derecho interno, al Parlamento nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento;
- Promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD;
- Previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del RGPD y, en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros Estados miembros;
- Tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control;
- Cooperar, en particular compartiendo información, con otras autoridades de control y prestar asistencia mutua con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del RGPD;
- Llevar a cabo investigaciones sobre la aplicación del RGPD, en particular basándose en información recibida de otra autoridad de control u otra autoridad pública;
- Hacer un seguimiento de cambios que sean de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las prácticas comerciales;
- Adoptar las cláusulas contractuales tipo para los encargados del tratamiento y las transferencias internacionales de datos;
- Elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos;
- Ofrecer asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento de datos personales en los casos en los que una evaluación de impacto muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo;



- Alentar la elaboración de códigos de conducta y dictaminar y aprobar los códigos de conducta de ámbito nacional que den suficientes garantías;
- Fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos, y aprobar los criterios de certificación;
- Llevar a cabo, si procede, una revisión periódica de las certificaciones expedidas;
- Elaborar y publicar los criterios para la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta y de organismos de certificación;
- Efectuar la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta y de organismos de certificación;
- Autorizar las cláusulas contractuales presentadas en contratos “ad hoc” y en disposiciones incorporadas a acuerdos administrativos entre autoridades y organismos públicos que incluyan las garantías adecuadas para realizar transferencias internacionales de datos;
- Aprobar normas corporativas vinculantes;
- Contribuir a las actividades del Comité Europeo de Protección de Datos;
- Llevar registros internos de las infracciones del presente Reglamento y de las medidas adoptadas en el ejercicio de los poderes correctivos, y
- Cualquier otra función relacionada con la protección de los datos personales.

Por su parte, y para el ejercicio de las referidas funciones, el artículo 58 del RGPD atribuye a las Autoridades de control los siguientes poderes o atribuciones:

- **PODERES DE INVESTIGACIÓN:**

- Ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y, en su caso, al representante del responsable o del encargado, que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de sus funciones;
- Llevar a cabo investigaciones en forma de auditorías de protección de datos;
- Llevar a cabo una revisión de las certificaciones;
- Notificar al responsable o al encargado del tratamiento las presuntas infracciones del RGPD;
- Obtener del responsable y del encargado del tratamiento el acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones;
- Obtener el acceso a todos los locales del responsable y del encargado del tratamiento, incluidos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos, de conformidad con el Derecho procesal de la Unión o de los Estados miembros.

- **PODERES CORRECTIVOS:**

- Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el RGPD;
- Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el RGPD;
- Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del RGPD;
- Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del RGPD, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado;

- Ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales;
- Imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición;
- Ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tratamiento y la notificación de dichas medidas a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales;
- Retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación o que no se emita si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación;
- Imponer una multa administrativa, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular;
- Ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional.

• **PODERES DE AUTORIZACIÓN Y CONSULTIVOS:**

- Asesorar al responsable del tratamiento conforme al procedimiento de consulta previa sobre las operaciones de tratamiento de datos personales en los casos en los que una evaluación de impacto muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo;
- Emitir, por iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes destinados al Parlamento nacional, al Gobierno del Estado miembro o, con arreglo al Derecho interno, a otras instituciones y organismos, así como al público, sobre cualquier asunto relacionado con la protección de los datos personales;
- Autorizar con carácter previo el tratamiento de datos realizado por un responsable en el ejercicio de una misión realizada en interés público, en particular el tratamiento en relación con la protección social y la salud pública, siempre que se determine en el Derecho nacional;
- Emitir un dictamen y aprobar proyectos de códigos de conducta;
- Acreditar los organismos de certificación;
- Expedir certificaciones y aprobar criterios de certificación;
- Autorizar cláusulas las transferencias internacionales basadas en cláusulas contractuales “ad hoc” y en disposiciones incorporadas a acuerdos administrativos entre autoridades y organismos públicos;
- Autorizar los acuerdos administrativos para las transferencias internacionales de datos entre autoridades y organismos públicos;
- Aprobar normas corporativas vinculantes.

La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la AEPD o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Presidencia

En el ejercicio de las funciones de inspección atribuidas a la AEPD, los funcionarios que la desempeñen tienen la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, según se estipula en la LOPDGDD.

Además, elaborará un informe anual de sus actividades que se remitirá al Parlamento nacional, al Gobierno y a aquellas autoridades que establezca la normativa interna.

**Por su parte, la LOPDGDD atribuye las siguientes potestades a la AEPD:**

- Dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución necesarias para la interpretación y cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD, que se denominarán “**Circulares** de la Agencia Española de Protección de Datos”.
- Acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad, y dictar las **directrices** generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisos para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al RGPD y a la LOPDGDD. Estas directrices son de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría.
- El ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Le corresponde a la AEPD la representación común de las autoridades autonómicas de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, en el que cada Estados miembro estará representado por una autoridad de control.
- Así mismo, coordinará la emisión de dictámenes del Comité Europeo de Protección de Datos cuando se refieran a proyectos de decisión que deban someterle las Agencias autonómicas, como autoridades competentes, o le soliciten el examen de un asunto.
- La convocatoria, por medio de su Presidencia, de las Agencias autonómicas de protección de datos, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, para contribuir a la aplicación coherente del RGPD y de la LOPDGDD. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación.

## 1.5 RECLAMACIONES ANTE LA AEPD

El RGPD estipula que todo interesado, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD, y, como se ha señalado, entre las funciones que atribuye a las autoridades de control está la de tramitar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable.

La LOPDGDD recoge que las reclamaciones tramitadas por la AEPD se rigen por lo dispuesto en el RGPD, en la LOPDGDD, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.

Su Título VIII regula los procedimientos tramitados en la AEPD con motivo de la presentación de una reclamación por la falta de atención de las solicitudes de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD, y los procedimientos en los que se investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD.

Este título también resulta de aplicación a los procedimientos que tramite la AEPD en el ejercicio de las competencias atribuidas por otras leyes, como las atribuidas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Un aspecto novedoso que introduce la LOPDGDD consiste en la necesidad de realizar de forma previa una evaluación de la admisibilidad a trámite de la reclamación. Serán inadmitidas las reclamaciones que no versen sobre cuestiones de protección de datos, carezcan de fundamento, sean abusivas o no se aporten elementos que permitan investigar la existencia de una infracción.

También podrán ser inadmitidas las reclamaciones cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la AEPD, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de infracciones consideradas leves.
- b) Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas.

En los demás casos, la LOPDGDD habilita a la AEPD para que, antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, remita la misma al delegado de protección de datos (DPD) que hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento, si el afectado presentase la reclamación ante la AEPD sin haberla planteado previamente ante el DPD<sup>1</sup>, para que comunique al afectado su decisión y responda a la AEPD en el plazo de 1 mes. Transcurrido dicho plazo sin que se comunique a la AEPD la decisión adoptada, ésta continuará con el procedimiento.

En el mismo sentido, cuando el responsable o encargado del tratamiento contra el que se dirija la reclamación esté adherido a un código de conducta que hubiera establecido procedimientos extrajudiciales o de mediación de los conflictos en materia de protección de datos, la AEPD podrá remitir al organismo establecido la reclamación para que le dé respuesta en el plazo de un mes, y tramitarla en el caso de que se rechazase.

Cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni el responsable o encargado estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos,

la AEPD podrá remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes.

La AEPD, tras el análisis de las referidas respuestas, adoptará la decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de la reclamación. Las reclamaciones serán inadmitidas a trámite cuando de la respuesta facilitada por el DPD, el organismo de supervisión de la aplicación de los códigos de conducta, el responsable del tratamiento o el encargado se desprenda que se han corregido las circunstancias puestas de manifiesto en la reclamación y adoptado las medidas necesarias para evitar situaciones similares.

La AEPD, de conformidad con lo dispuesto en la LOPDGDD, determinará con carácter previo a la iniciación de cualquier actuación el carácter nacional o transfronterizo. Si la AEPD no fuera la Autoridad de control principal remitirá la reclamación formulada a la Autoridad de control principal que se considere competente, a fin de que por la misma se le dé el curso oportuno, y archivará provisionalmente el procedimiento hasta que la autoridad de control principal adopte una decisión, en cuyo caso la AEPD informará al reclamante de la decisión adoptada por la Autoridad de control principal.

La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, así como la que determine, en su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses. Si transcurrido este plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación.

Después de la admisión a trámite, en el supuesto de reclamaciones que pudieran dar lugar a un procedimiento sancionador, se pueden realizar actuaciones previas de investigación encaminadas a

<sup>1</sup> Cuando el interesado se dirija previamente al DPD, éste tendrá un plazo máximo de 2 meses para adoptar la decisión.

determinar la concurrencia de motivos que justifiquen la apertura del procedimiento sancionador y no podrán extenderse más de 12 meses a contar desde el acuerdo de admisión a trámite de la reclamación.

Las actuaciones de investigación también pueden iniciarse por acuerdo que decida su iniciación cuando la AEPD actúe por propia iniciativa o como consecuencia de la comunicación que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión Europea, en cuyo caso el plazo de 12 meses se computa a partir de la fecha del referido acuerdo de iniciación.

Iniciado el procedimiento sancionador tendrá una duración máxima de 9 meses.

Sin embargo, cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del RGPD, el procedimiento se iniciará por el acuerdo de admisión a trámite y su duración no podrá exceder del plazo de seis meses

Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos de reclamación serán objeto de publicación.

Establece el RGPD que toda persona física o jurídica tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante que le concierna de una autoridad de control. Las resoluciones de la AEPD agotan la vía administrativa y, por tanto, pueden ser objeto de recurso de reposición, ante la propia AEPD, y de recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.



## 2. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS (CTPTA)

Al igual que las comunidades autónomas vasca y catalana, en Andalucía contamos con una autoridad de control independiente con su ámbito de competencia en la Comunidad Autónoma, con algunas limitaciones como veremos a continuación.

La creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se hace a través de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. En su preámbulo se indica concretamente que *“El capítulo segundo crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como entidad dotada de autonomía e independencia para actuar como autoridad independiente de control tanto en el ámbito de la transparencia como en el de la protección de datos. Se ha configurado como órgano de los previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración Pública, es decir, como una más de aquellas entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía”*. Asimismo, continúa indicando que *“Este órgano estará dotado de independencia orgánica y funcional, y autonomía con respecto a la Administración de la Junta de Andalucía, con respecto al ejercicio de las potestades que se le adscriban, y con personalidad jurídica diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. Su independencia, por tanto, con respecto a la Administración autonómica es máxima, y su prestigio futuro sólo podrá venir determinado por el rigor de sus actuaciones y resoluciones de control, una vez que empiece a realizar su actividad.”* La cuestión de la independencia en el ejercicio de sus funciones, como puede verse, es un elemento fundamental para el funcionamiento de esta organización, ya que su actuación y el respeto sobre la misma dependerá de dicha independencia, a pesar que su nombramiento sea político.

En línea con lo anterior, en el artículo 43, sobre su creación y naturaleza, en el apartado 3 encontramos la referencia expresa a cómo deberá actuarse en el ejercicio de sus funciones desde el Consejo, en concreto *“con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de las mismas”*, es decir, en un marco jurídico que dota de legalidad a las mismas y nuevamente destacando su imparcialidad al actuarse de una manera profesional e independiente.

En los artículos 45 y 46 se aborda su finalidad y cómo podrá desarrollarla. Sobre ésta establece que el ámbito territorial será el de Andalucía<sup>2</sup> *“como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre [siendo de aplicación en la actualidad el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales]<sup>3</sup>, y como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, conforme a lo previsto en esta ley y en la legislación básica en la materia.”* Respecto su estructura encontramos un doble sistema de actuación, por una parte, una comisión consultiva cuya composición y funciones comentaremos más adelante, y por otra una dirección que presidirá tanto la comisión consultiva como toda aquella actuación propia del ejercicio de las competencias atribuidas al Consejo.

La Dirección del Consejo será desarrollada por una persona nombrada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por designación del Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, de una persona

<sup>2</sup> Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. BOJA 124 de 30/06/2014.

[https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/BOJA14-124-00024-11103-01\\_00050563.pdf](https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/BOJA14-124-00024-11103-01_00050563.pdf)

<sup>3</sup> Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE 294, de 6 de diciembre.

<https://boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf>



de reconocido prestigio y competencia profesional, que tendrá rango de Viceconsejería, por un periodo de 5 años no renovable, si bien continuará en funciones hasta la toma de posesión de la persona que venga a sustituirla, sin tiempo determinado para ello. Ésta deberá ejercer sus funciones con plena independencia y objetividad, y no estará sujeta a instrucción alguna en el desempeño de aquellas, si bien estará en la obligación de oír a la Comisión Consultiva en aquellas propuestas que esta le realice en el ejercicio de sus funciones. La persona que ejerza la Dirección del Consejo sólo cesará antes de la expiración de su período de mandato por alguna de las siguientes causas:

- a) *Muerte o incapacitación judicial.*
- b) *Renuncia.*
- c) *Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que necesariamente será oída la Comisión Consultiva, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.*

Sus funciones, que se desarrollan en el artículo 48, son:

- a) *Representar al Consejo.*
- b) *La resolución de las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso que puedan presentarse por las personas solicitantes o por las terceras personas interesadas en los supuestos previstos en la legislación básica.*
- c) *Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.*
- d) *Presentar ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación.*
- e) *Resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le planteen las administraciones y entidades sujetas a esta ley.*
- f) *Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, así como las consultas que para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 le planteen los órganos competentes.*
- g) *Ejercer el control de la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 23.*
- h) *Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las previsiones del título VI.*
- i) *Desempeñar las funciones previstas en la legislación sobre protección de datos para su ejercicio por las agencias autonómicas en su caso.*

Además, según el artículo 10.3 de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía<sup>4</sup>) le corresponde a la Dirección:

- a) *Planificar, coordinar, impulsar y dirigir las actividades del Consejo, así como la promoción y alcance de sus objetivos y funciones.*
- b) *Dictar los actos, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las funciones del Consejo.*
- c) *Las relaciones con la Consejería de la Presidencia y Administración Local en el desarrollo de las funciones del Consejo.*
- d) *Dictar recomendaciones y directrices en materia de transparencia pública y protección de datos.*

<sup>4</sup> Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. BOJA 193 de 02/10/2015 [https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/193/BOJA15-193-00009-16181-01\\_00077146.pdf](https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/193/BOJA15-193-00009-16181-01_00077146.pdf)

- e) *Aprobar y remitir el Informe anual al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos, así como comparecer ante el Parlamento para su presentación.*
- f) *Representar al Consejo en las reuniones de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.*
- g) *Firmar convenios y otros instrumentos de colaboración en materias específicas dentro del ámbito de sus actuaciones y competencia.*
- h) *Acordar el ejercicio de acciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicia.*
- i) *El ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación del artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre [de aplicación en la actualidad el Título IX de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre].*

Finalmente tendrá como función la de actuar como representante de la Comunidad Autónoma en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, en aplicación del artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, regulada en el artículo 49, la define como un órgano de participación y consulta en materia de transparencia y protección de datos. Asimismo, determina que “estará compuesta por la persona que ejerza la Dirección del Consejo y catorce miembros en representación de:

- a) *La Administración de la Junta de Andalucía.*
- b) *El Parlamento de Andalucía, reuniendo la condición de diputado o diputada.*
- c) *Las administraciones locales andaluzas.*
- d) *Las universidades públicas andaluzas.*
- e) *Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias.*
- f) *Las entidades representativas de los intereses económicos y sociales.*
- g) *Personas expertas en la materia.*
- h) *Un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.*
- i) *Un representante de la Cámara de Cuentas de Andalucía.”*

Sus miembros serán nombrados por la persona titular de la Consejería de la Presidencia y serán cesados por las mismas causas que la persona que ejerza la Dirección del Consejo o a petición de la entidad que los hubiera propuesta.

Analizando el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía vemos que su artículo 3 establece que tiene como finalidad en materia de protección de datos “*velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma*”, así como las atribuidas por el Capítulo II del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Sobre su funcionamiento son especialmente destacables dos cuestiones. Por una parte en lo relativo a los principios de funcionamiento (artículo 4), ya que es a quien se le asigna ponderar “*el interés público en el derecho de acceso a la información pública derivado de los principios de publicidad y transparencia de la actuación de los poderes públicos, con el derecho de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información publicada o solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el resto de límites previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno*”, es decir, realizar una actuación sumamente importante

porque podrá afectar el ejercicio de derechos fundamentales de las personas. La otra cuestión destacable es su ámbito de actuación, que en “*materia de protección de datos, y en aplicación del artículo 82 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones Locales, las universidades del sistema universitario andaluz, así como las entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas*”, quedando por tanto cualquier cuestión relacionada con la protección de datos personales que pueda ocurrir respecto una empresa en el ámbito privado (expresado en sentido contrario al ámbito público referido anteriormente) fuera de su competencia y por lo tanto bajo la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos, aunque la vulneración y/o reclamación haya tenido lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y respecto una empresa con titularidad en ese territorio.

La estructura y funcionamiento del Consejo se aborda en el artículo 8 (si bien ya quedó definido en la Ley 1/2014, de 24 de junio como ya se comentó más atrás). A la Dirección se adscribirán las diversas áreas y unidades administrativas que se incluyan en la relación de puestos de trabajo, y que tendrán asignadas la gestión de las competencias de la misma, de la que dependerán orgánica y funcionalmente. Su estructura básica, que se podrá ampliar, se compondrá al menos de las siguientes áreas y unidades:

- Área de Transparencia, que desarrollará las tareas de ordenación, tramitación, gestión y propuesta, de las funciones relacionadas con la materia de transparencia pública, así como otras que le sean encomendadas por la Dirección.
- Área de Protección de Datos, que desarrollará las tareas de ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las funciones relacionadas con la materia de protección de datos, así como otras que le sean encomendadas por la Dirección.
- Secretaría General, que será responsable de la gestión interna y asuntos de la administración general y de funcionamiento del Consejo, de los servicios informáticos y telecomunicaciones, así como de los asuntos atribuidos por estos Estatutos.
- Asesoría Jurídica, que tendrá como cometido el asesoramiento jurídico del Consejo.

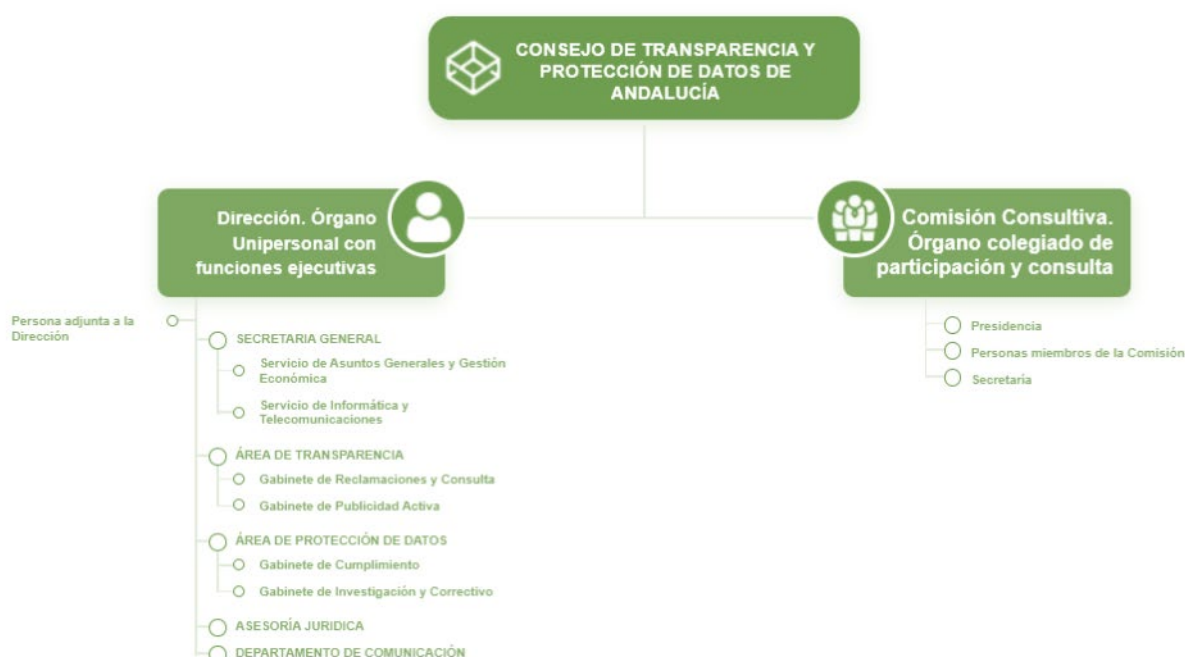


Figura 1. Esquema de la estructura organizativa del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Fuente: Página web del CTPDA. <https://www.ctpdandalucia.es/informacion-general>

La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, que se aborda en el artículo 12, se constituye como órgano de participación y consulta en Andalucía en materia de transparencia pública y protección de datos y estará compuesta por la persona que ejerza la Dirección, que la presidirá, y por catorce miembros, que serán nombrados por la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia. Los nombramientos serán efectivos desde la fecha de publicación de los mismos en el BOJA. Esos catorce miembros ya se indicaban en el artículo 49 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, quedando en el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, la distribución de las mismas de la siguiente manera:

- a) *La Administración de la Junta de Andalucía, dos miembros designados por la Consejería competente en materia de transparencia.*
- b) *El Parlamento de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de Diputado o Diputada.*
- c) *La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, un miembro.*
- d) *La Cámara de Cuentas de Andalucía, un miembro, que deberá tener la condición de consejero o consejera de la misma.*
- e) *Las Administraciones Locales andaluzas, un miembro, a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación.*
- f) *Las Universidades Públicas andaluzas, un miembro, a través del Consejo Andaluz de Universidades.*
- g) *Las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias, un miembro, a través del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.*
- h) *Las entidades representativas de los intereses sociales, dos miembros, en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Andalucía.*
- i) *Las entidades representativas de los intereses económicos, un miembro, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Andalucía.*
- j) *Tres personas expertas en la materia de transparencia o de protección de datos, designadas por la Consejería competente en materia de transparencia, que podrán provenir de entidades que representen a colectivos de profesionales de archivos, de la documentación, de entidades dedicadas al fomento de la transparencia, de entidades relacionadas con la protección de datos, y del ámbito universitario, entre otras.*

La composición actual puede conocerse a través de la web del Consejo, en la dirección <https://www.ctpdandalucia.es/comision-consultiva/personas-miembros-de-la-comision>, que también nos da paso a conocer cual está siendo su agenda de actividad, entre otras cuestiones. Sus funciones quedan definidas como las siguientes:

- a) *Asesorar a la Dirección en el ejercicio de sus funciones.*
- b) *Formular propuestas a la Dirección en el ámbito de las competencias del Consejo, especialmente en la elaboración de recomendaciones y directrices en las materias propias del Consejo.*
- c) *Ser oída en el procedimiento sobre la separación de la persona titular de la Dirección en los supuestos del artículo 47.4 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, así como de sus miembros.*
- d) *Informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales sobre las materias competencia del Consejo.*
- e) *Analizar la propuesta de Informe anual con carácter previo a su remisión al Parlamento de Andalucía.*
- f) *Aquellas otras que se le puedan atribuir por la Dirección.*



Si bien la Comisión Consultiva podrá solicitar a la Dirección la información que estime oportuna para el desarrollo de sus funciones, ya sea del propio Consejo o de las personas y entidades incluidas en el ámbito de actuación del mismo. Más allá que se remita la documentación oportuna, desde la Dirección se remitirá trimestralmente en formato electrónico a los miembros de la Comisión Consultiva información sobre la actividad del Consejo y las materias de su competencia. La Comisión Consultiva podrá crear subcomisiones o grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus competencias, que estarán compuestas por sus propios miembros.

Finalmente destacar que el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, asigna a personal funcionario de carrera el “ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta de potestades públicas o salvaguardia de interés generales”, así como que recuerda que “todo el personal del Consejo estará obligado a guardar reserva sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en las mismas” y que el “personal funcionario del Consejo cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrán el carácter de agente de la autoridad”, todo ello relacionado con el esfuerzo de dotar de veracidad a través de la independencia del ámbito político y capacidad de actuación.

Información específica que desarrolla el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía puede consultarse a través de su página web<sup>5</sup>, como son: atención a las reclamaciones, facilitación a la ciudadanía del contacto de los Delegados de Protección de Datos que han comunicado su designación, gestión de la comunicación de los Delegados de Protección de Datos de su nombramiento (obligatorio), atención de las notificaciones de brechas de seguridad, así como las resoluciones sobre reclamaciones de protección de datos y dictámenes en esta materia.



Figura 2. Resumen de las líneas de actividad del Área de Protección de Datos. Fuente: Página web del CTPDA. <https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos>

<sup>5</sup> Área de Protección de Datos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. <https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos>

### 3. EL COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

#### 2.1 NATURALEZA Y COMPOSICIÓN

El Comité Europeo de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018, fecha de aplicación del RGPD, adoptó sus reglas de procedimiento (consultables en inglés en este enlace: [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_rop\\_adopted\\_en.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_rop_adopted_en.pdf))

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) es el órgano encargado de velar por la aplicación coherente del RGPD.

El Comité es el sucesor del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT29, que agrupa a las Autoridades europeas de protección de datos) previsto en la Directiva 95/46, pero existen diferencias sustanciales entre ambos.

A diferencia del GT29, el Comité adopta la forma de organismo de la Unión, y tiene personalidad jurídica propia.

Su composición es también similar a la del GT29. Está formado por el director o presidente de una autoridad de control de cada Estado miembro y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), o sus representantes respectivos.

Son también miembros del Comité, aunque sin voto, las autoridades de protección de datos de los estados miembros del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La posición del SEPD es peculiar. En principio, es miembro de pleno derecho y como tal puede participar como cualquier otro miembro en los trabajos del Comité.

Sin embargo, hay una diferencia clara entre el SEPD y los demás miembros del Comité:

- Las Instituciones, agencias y organismos de la Unión no se rigen por el RGPD, sino por su propio Reglamento de Protección de Datos. En la actualidad ese Reglamento es el 45/2001, aunque está siendo revisado, justamente para adaptarlo al RGPD. Consecuentemente, el SEPD, como Institución de la Unión, no está sometido al RGPD ni tampoco lo aplica en su tarea de supervisión. Por todo ello, aunque el SEPD puede participar como cualquier otra autoridad en el CEPD, en el caso de las decisiones que se adopten en virtud del artículo 65 del RGPD, a las que más adelante nos referiremos, sólo podrá votar en decisiones relativas a los principios y normas aplicables a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se correspondan en cuanto al fondo a las contempladas en el RGPD.

Por otra parte, cuando en un Estado Miembro haya varias autoridades encargadas de controlar la aplicación del RGPD, se nombrará a una de ellas miembro representante común, siempre de acuerdo con el derecho nacional de cada Estado.

Esta previsión del RGPD está pensada, fundamentalmente, para atender a situaciones como la de España, donde aparte de la Agencia Española existen varias autoridades autonómicas, con competencias referidas al sector público de sus respectivas Comunidades. Es también el caso de Alemania, donde hay autoridades de control distintas de la autoridad federal en cada uno de los estados federados.

Las comunicaciones entre el CEPD y las autoridades autonómicas se practicarán por conducto de la AEPD que estará asistida por un representante de la Autoridad autonómica en su intervención ante el Comité.



Por su parte, la Comisión Europea no es, realmente, miembro del Comité. Tiene derecho a participar en sus reuniones y actividades, pero sin voto. Para ello, deberá designar a un representante y deberá ser informada por el presidente del CEPD sobre las actividades del Comité.

El CEPD actuará con total independencia en el ejercicio de sus funciones y no podrá recibir instrucciones de ningún tipo. El único caso en que tiene que atender las indicaciones de otra Institución de la Unión es el de las peticiones de informe de la Comisión, sobre las que tiene la obligación de responder y, en su caso, hacerlo en los plazos que fije la Comisión.

## 2.2 FUNCIONAMIENTO

El Comité cuenta con un presidente y dos vicepresidentes, que serán elegidos por mayoría simple de entre sus miembros. El mandato del presidente y de los vicepresidentes será de cinco años, y podrá renovarse una sola vez.

El presidente convoca las reuniones del Comité, notifica sus decisiones y es el encargado de velar por el buen funcionamiento de los trabajos del Comité. Aunque el RGPD no se pronuncia sobre ello, es de suponer que el presidente, como sucede ahora con el GT29, asuma también la función de representación del CEPD.

Esta cuestión, como otras relacionadas con el funcionamiento del CEPD, se incluye en el Reglamento de Régimen Interior que el CEPD adoptado el 25 de mayo de 2018 y modificado y adoptado el 29 de enero de 2020:

[https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb\\_rop\\_version\\_6\\_adopted\\_20200129\\_es.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_rop_version_6_adopted_20200129_es.pdf).

El CEPD tendrá una Secretaría, que será asumida por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Dicho en otros términos, el CEPD no cuenta con personal ni presupuesto propios, sino que éstos le serán proporcionados por el SEPD.

Las funciones de la Secretaría incluyen todo lo relacionado con la gestión necesaria para que el CEPD pueda desempeñar su labor (gestión presupuestaria, organización de reuniones, interpretación y traducción...) pero también la preparación, redacción y publicación de dictámenes, decisiones relativas a la solución de diferencias entre autoridades de control y otros textos adoptados por el Comité.

Esto puede dar lugar a conflictos de intereses, dado que el SEPD es, a la vez, miembro del CEPD y se ocupa de prestar servicios de Secretaría que pueden tener influencia en el contenido de las decisiones que adopte el Comité.

Para evitar esos posibles conflictos, el personal del SEPD que participe en los trabajos de Secretaría dependerá de un superior jerárquico distinto del que se ocupe de las funciones propias del SEPD.

Además, el SEPD y el CEPD han suscrito un memorando de entendimiento en el que se establecerán los términos de la cooperación entre ambos y también las obligaciones del personal vinculado a la Secretaría.

## 2.3 FUNCIONES

Es en las funciones que el RGPD atribuye al CEPD donde más claramente se perciben las diferencias con el GT29, pudiendo agruparse las mismas en tres categorías, diferenciadas por los efectos de las decisiones que el Comité puede adoptar.

- **FUNCIONES CONSULTIVAS, DE ASESORAMIENTO Y GUÍA.**

Estas funciones constituyen el núcleo principal del artículo 70 del RGPD.

Es en este artículo donde se prevé, por ejemplo, que el CEPD asesorará a la Comisión en cualquier materia en que ésta le consulte.

La mayoría de las funciones recogidas en este artículo tienen que ver con la adopción de recomendaciones, directrices o buenas prácticas en una gran cantidad de materias. Entre ellas pueden citarse las decisiones automatizadas basadas en perfiles, la identificación de violaciones de seguridad y los criterios para notificar a las autoridades de control o a los interesados, la aplicación de las medidas correctivas y multas previstas en el RGPD o los criterios para realizar transferencias internacionales sobre la base de las excepciones previstas en el artículo 49.1 del RGPD.

También aquí se encomienda al CEPD el promover la cooperación entre sus miembros, a través, entre otros, de programas de formación comunes e intercambios de documentación y personal.

Estas funciones son las que más se asemejan a las que actualmente tiene atribuidas el GT29. Sin embargo, las diferencias cuantitativas y cualitativas son muy notables, lo que contribuye a subrayar el papel central que el CEPD tiene atribuido en el sistema de protección definido por el RGPD.

Por un lado, mientras que las funciones del GT29 se resumen en la Directiva en apenas cinco apartados de un artículo, formulados de una manera genérica, las del Comité se desarrollan a lo largo de veintisiete apartados del mencionado artículo 70.

Estos apartados están redactados, además, de forma muy precisa, indicando específicamente tanto el aspecto de cada materia sobre el que actuará el CEPD como la misión concreta que se le encomienda.

Ello permite suponer que, aunque las directrices, recomendaciones o dictámenes que el Comité adopte en aplicación de este artículo no sean jurídicamente vinculantes, están llamadas a tener un peso determinante en la interpretación y aplicación del RGPD, en la medida en que procederán de un órgano al que el RGPD le confiere expresamente y en exclusividad esas funciones, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comisión y a los tribunales.

- **FUNCIONES DE AUTORIZACIÓN.**

Estas funciones se recogen en el artículo 64 del RGPD, dentro del capítulo dedicado al llamado “mecanismo de coherencia”.

El mecanismo de coherencia, en el que se integran tanto los dictámenes que se adopten en aplicación de este artículo 64 como las decisiones derivadas del artículo 65, que se tratará más adelante, es una de las principales novedades del RGPD.

Se configura como un instrumento específicamente diseñado para permitir al CEPD alcanzar el objetivo de lograr la aplicación coherente del RGPD.

En ambos artículos, con las diferencias que a continuación se detallan, se pretende dotar al Comité de competencias reforzadas para asegurar que las decisiones que adopte cada autoridad de control en los Estados Miembro sigan criterios comunes y consistentes en todas las materias que puedan tener efectos en el conjunto de la Unión.

En el caso del artículo 64, las autoridades nacionales están obligadas a someter al dictamen del Comité las decisiones que tengan previsto adoptar en los siguientes ámbitos:

- Listas de tratamientos que deben ser objeto de evaluación de impacto sobre la protección de datos.
- Aprobación de códigos de conducta que afecten a varios Estados Miembro.
- Aprobación de criterios para la acreditación de organismos de supervisión de códigos de conducta o de organismos de certificación.
- Modelos de clausulado para contratos de encargo de tratamiento.
- Cláusulas contractuales tipo para transferencias internacionales adoptadas por una autoridad nacional.
- Cláusulas contractuales “ad hoc” presentadas por un exportador para ofrecer garantías en una transferencia internacional de datos.
- Normas corporativas vinculantes.

Esta lista permite ver con más claridad cuál es el objeto de estos dictámenes. Lo que se persigue es controlar si una autoridad de un Estado Miembro decide, por ejemplo, autorizar las normas corporativas vinculantes que le haya presentado una empresa multinacional, la decisión no se aleja de las valoraciones, criterios o interpretaciones comunes que haya ido estableciendo el Comité.

En suma, se trata de avanzar un paso más desde las recomendaciones o directrices previstas en el artículo 70 hacia el objetivo de lograr que el RGPD se aplica uniformemente en toda la Unión. Visto desde otra perspectiva, supone que ninguna autoridad de control nacional podrá tomar decisiones unilateralmente sin tener en cuenta la opinión del Comité.

Esta competencia del Comité no se limita a esta lista de materias tasadas. Cualquier autoridad de control, el presidente del Comité o la Comisión podrán pedir al Comité que emita un dictamen sobre asuntos de interés general o que afecten a más de un Estado Miembro.

El Comité deberá emitir dictamen, por mayoría simple de sus miembros, en un plazo de ocho semanas desde que reciba la propuesta de decisión, siempre que no se hubiera pronunciado ya sobre el asunto con anterioridad, en cuyo caso podrá declinar la adopción del dictamen.

La autoridad de control que haya presentado la propuesta de decisión no podrá adoptarla mientras se sustancia el procedimiento ante el Comité.

El RGPD prevé que el presidente circule entre los miembros toda la información pertinente por medios electrónicos.

El RGPD parece apuntar a un procedimiento de adopción de los dictámenes basado en la aceptación, en principio, de las propuestas, salvo que alguno de los miembros plantee objeciones dentro de los plazos marcados por el presidente en cada caso.

Los dictámenes del Comité en virtud del artículo 64 no tienen carácter jurídicamente vinculante en sí mismos. Pero ello no significa que carezcan de importantes efectos para las autoridades implicadas.

En primer lugar, el RGPD establece que la autoridad que haya propuesto la decisión “tendrá en cuenta en la mayor medida posible” el contenido del dictamen del CEPD. En el plazo de dos semanas desde que reciba la notificación del dictamen deberá comunicar al presidente si piensa modificar su decisión siguiendo los contenidos del dictamen, cuando este sea el caso, y enviar el proyecto de decisión modificada.

Más relevante aún es el hecho de que si la autoridad de control decide desoír en todo o en parte el dictamen del Comité, se aplicará el mecanismo de resolución de conflictos del artículo 65, que se trata en el siguiente apartado. Ello supone que un dictamen que no es vinculante en sí mismo puede tener esos efectos si la autoridad afectada no lo respeta y si así lo decide el Comité.

- **FUNCIONES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.**

Estas funciones se recogen en el artículo 65 del RGPD y son las que mejor definen el nuevo papel que corresponde al CEPD.

En síntesis, el artículo 65 prevé que el Comité podrá adoptar decisiones jurídicamente vinculantes para las autoridades que lo integran en tres supuestos concretos. Todos ellos se refieren a situaciones en que dos o más autoridades discrepan entre sí en la aplicación del RGPD en materias que tienen efectos en más de un Estado Miembro.

Uno de estos supuestos ya se ha mencionado en el apartado anterior. Se trata de los casos en que una autoridad de control no solicite el dictamen del Comité estando obligada a ello o en que no siga el dictamen del Comité. Según el artículo 65.1.c del RGPD, cualquier autoridad afectada o la Comisión pondrán el asunto en conocimiento del CEPD.

Los otros dos supuestos que recoge el artículo 64 tienen que ver con el mecanismo de cooperación para la adopción de decisiones que afectan a tratamientos de datos transfronterizos.

A los efectos de analizar las funciones del CEPD, bastará aquí con señalar que **se consideran tratamientos transfronterizos aquellos que lleva a cabo un responsable (o encargado) en el contexto de las actividades de varios establecimientos en varios Estados Miembro. Tendrán también esa consideración los tratamientos que, aunque se lleven a cabo en el contexto de las actividades de uno o varios establecimientos en un solo Estado Miembro, afectan significativamente a personas en varios Estados Miembro.**

Un ejemplo de este tipo de tratamientos sería el de las grandes empresas prestadoras de servicios de la sociedad de la información, que tienen establecimientos en prácticamente todos los Estados Miembro de la Unión. También serían tratamientos transfronterizos los que desarrolle, por ejemplo, una página de comercio electrónico instalada solo en un Estado Miembro pero que ofrece sus productos a consumidores en varios Estados Miembro, con webs en diferentes idiomas y ofertas específicamente diseñadas para cada Estado.

Lo relevante para considerar un tratamiento como transfronterizo es que haya establecimientos en dos o más Estados o que estén afectados ciudadanos en dos o más Estados. Cuestiones como que las posibles

reclamaciones contra el tratamiento se hayan presentado en varios Estados Miembros o solo en uno de ellos, o que la empresa sea de origen europeo o proceda de un país tercero son irrelevantes a estos efectos.

**En estos tratamientos, la gestión de las reclamaciones de los interesados o de las investigaciones que puedan desarrollarse ante posibles infracciones del RGPD es coordinada por una autoridad que tiene la consideración de “autoridad principal”.** Las autoridades de los demás Estados en que la empresa tenga establecimientos o en los que residan interesados “significativamente afectados” participarán también en el procedimiento como “autoridades afectadas”.

Esa autoridad es la del Estado Miembro donde el responsable tiene su establecimiento principal.

El RGPD establece que se considerará establecimiento principal la administración central de la compañía en la Unión, salvo que sea otro establecimiento en la Unión el que tome las decisiones sobre los fines y medios del tratamiento transfronterizo de que se trate.

### **Simplificando mucho el sistema, podría ponerse el siguiente ejemplo:**

Un banco multinacional español, con sucursales o filiales en varios Estados Miembro, las cuales tratan los datos de sus clientes siguiendo los criterios establecidos por la central en España y empleando programas y aplicaciones desarrollados en la central.

**En ese supuesto, la Agencia Española sería la autoridad principal ante cualquier reclamación que pudiera plantear un interesado contra el banco y las autoridades de los Estados Miembro donde haya sucursales o filiales serían autoridades afectadas.**

- Un primer problema es el de establecer dónde está el establecimiento principal. La definición del RGPD puede ser fácil de aplicar en determinadas organizaciones, pero puede plantear problemas en otras que estén estructuradas de forma compleja, con entramados de sociedades en varios Estados Miembro que desempeñen varios papeles de diferente naturaleza en relación con los procesos de tratamiento de datos. Por ejemplo, un banco puede desarrollar también un negocio de seguros a través de una empresa del grupo y puede darse la circunstancia de que las sedes principales del negocio bancario y de la actividad aseguradora se encuentren en diferentes Estados Miembro. La determinación de cuál es el establecimiento principal si, por ejemplo, ambas empresas comparten una parte de sus clientes y también determinados procesos para el tratamiento de sus datos, personales puede resultar compleja.
- El segundo supuesto en que el RGPD atribuye al Comité la facultad de resolver conflictos entre las autoridades de control se refiere, precisamente, a esos casos en los que no hay acuerdo entre las autoridades implicadas sobre dónde se sitúa el establecimiento principal y, consiguientemente, cuál de ellas es la autoridad principal.
- Siguiendo con el mecanismo de coherencia, su idea central es que las decisiones sean adoptadas de común acuerdo por todas las “autoridades afectadas”, por mucho que sea la autoridad principal la que dirija el procedimiento y que le corresponda a ella elaborar las propuestas de decisión.
- El último y tercer supuesto, previsto en el artículo 65 del RGPD, cuando no se logre el acuerdo porque una o varias “autoridades afectadas” discrepen de la propuesta de la autoridad principal y ésta decida mantener su propuesta, el asunto será remitido al CEPD para que se pronuncie sobre las objeciones planteadas por las autoridades discrepantes.

**En los tres casos el CEPD adoptará decisiones vinculantes para sus miembros en el plazo de un mes, prorrogable por otro mes si el tema es especialmente complejo, por mayoría de dos tercios de sus miembros.**

No obstante, si en esos plazos el Comité no ha logrado alcanzar la mayoría requerida, la decisión podrá adoptarse por mayoría simple dentro de las dos semanas siguientes a la finalización del segundo mes.

Estas decisiones del CEPD deben ser cumplidas por las autoridades a las que concierne en el plazo de un mes desde que les sean notificadas. Las decisiones de las autoridades nacionales que apliquen las del Comité deberán hacer referencia a estas últimas y especificar que son publicadas en la web del CEPD.

Las decisiones del Comité en virtud del artículo 65 pueden ser recurridas por cualquiera de los miembros del Comité ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También pueden ser objeto de recurso directo ante el Tribunal por parte de los afectados por los procedimientos que dieron lugar a que el Comité debiera pronunciarse. Estos últimos podrán recurrir indirectamente la decisión del CEPD ante los tribunales nacionales cuando planteen recursos contra las decisiones de las autoridades que apliquen las del Comité. En este último caso, si se cuestiona indirectamente la decisión del CEPD en el recurso nacional, los tribunales nacionales deberán plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, ya que éste es el único que puede anular una decisión de un organismo de la Unión.



## 4. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL RGPD

### 3.1 INTRODUCCIÓN

El capítulo VIII del RGPD, bajo el título “Recursos, responsabilidad y sanciones”, regula el régimen sancionador aplicable, que es completado con la LOPDGDD, ya que el RGPD no realiza una regulación detallada al respecto. Así, por ejemplo, el RGPD no contempla lo referente a la prescripción de infracciones, tan característica en el régimen sancionador español de cualquier materia, ni tampoco realiza una clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves.

Esta circunstancia es debida a que este sistema de sanciones o actuaciones correctivas es sumamente genérico, dado que no se tipifican las conductas ni se establecen las reacciones concretas ante su comisión. La LOPDGDD describe las conductas típicas manteniendo la distinción, a efectos de prescripción, entre infracciones muy graves, graves y leves, a la vista de la diferenciación que el RGPD establece al fijar la cuantía de las sanciones. Puesto que la categorización de las infracciones afecta también a sus plazos de prescripción, esta nueva ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del RGPD.

En este sentido, la LOPDGDD considera como sujetos sometidos al régimen sancionador del RGPD y de la citada Ley Orgánica a los siguientes:

- a) Los responsables de tratamiento.
- b) Los encargados de los tratamientos.
- c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea.
- d) Las entidades de certificación.
- e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.

El régimen sancionador no es aplicable al DPD.

### 3.2 INFRACCIONES Y SANCIONES

En primer lugar, debemos tener en consideración el artículo 83, apartados 1 y 2, del RGPD, que señala lo siguiente:

- Las multas administrativas (poder correctivo contemplado en el artículo 58.2.i del RGPD) serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
- Se impondrán en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58.2 en donde se relacionan los poderes correctivos que disponen las Autoridades de Control.

Asimismo, y al objeto de graduar la cuantía de las sanciones pecuniarias, el mencionado artículo 83.2, establece los siguientes **criterios de graduación**:

Asimismo, y al objeto de graduar la cuantía de las sanciones pecuniarias, el mencionado artículo 83.2, establece los siguientes **criterios de graduación**:

- a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;
- b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;
- c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;
- d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32; e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;
- e) el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;
- f) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;
- g) la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;
- h) cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;
- i) la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y
- j) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.

Además, este precepto se completaría con lo que al respecto prevé la LOPDGDD, cuyo artículo 76.2, atendiendo a que el apartado k) del artículo 83.2.K del RGPD se refiere a “cualquier otro factor agravante o atenuante (...)”, **prevé como criterios de graduación de las sanciones**:

- a) El carácter continuado de la infracción.
- b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
- c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
- d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción.
- e) La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.
- f) La afectación a los derechos de los menores
- g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un DPD
- h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado.

Por otra parte, los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del RGPD, se refieren a los límites de la cuantía de las sanciones pecuniarias en función de la infracción cometida:

- Artículo 83.4: señala una multa de cuantía máxima de 10.000.000 €, o el 2% del volumen de negocio total (optándose por la de mayor cuantía entre ambos valores) en la comisión de las siguientes infracciones:
  - a. Las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos:
    - Artículo 8 (“consentimiento de los menores”).
    - Artículo 11 (“tratamientos que no requieren identificación”).
    - Artículos 25 a 39:
      - Artículo 25 “protección de datos desde el diseño y por defecto”.
      - Artículo 26 “corresponsables del tratamiento”.
      - Artículo 27 “representantes de responsables o encargados no establecidos en la Unión”.
      - Artículo 28 “encargado del tratamiento”.
      - Artículo 29 “tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento”.
      - Artículo 30 “registro de actividades del tratamiento”.
      - Artículo 31 “cooperación con la autoridad de control”.
      - Artículo 32 “seguridad del tratamiento”.
      - Artículos 33 y 34 “notificación y comunicación de violaciones de seguridad”.
      - Artículo 35 “evaluación relativa a la protección de datos”.
      - Artículo 36 “consulta previa”.
      - Artículos 37 a 39 “delegado de protección de datos”.
  - b. Las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43;
  - c. Las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4.
- El artículo 83.5 señala una multa de cuantía máxima de 20.000.000 €, o el 4% del volumen de negocio total (optándose por la de mayor cuantía entre ambos valores) en la comisión de las siguientes infracciones:
  - a. los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;
  - b. los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22;
  - c. las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional a tenor de los artículos 44 a 49;
  - d. toda obligación en virtud del Derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al capítulo IX:
    - art.85 Tratamiento y libertad de expresión y de información.
    - art.86 Tratamiento y acceso público a documentos oficiales.
    - art.87 Tratamiento del número nacional de identificación.
    - art.88 Tratamiento en el ámbito laboral.
  - e. el incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control con arreglo al artículo 58, apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1.

El artículo 83.6 señala una multa de cuantía máxima de 20.000.000 €, o el 4% del volumen de negocio total (optándose por la de mayor cuantía entre ambos valores) en la comisión de la infracción por incumplimiento de las resoluciones de la Autoridad de Control a tenor de lo dispuesto en el artículo 58.2.

Además, las sanciones que se impongan pueden ser a título adicional (o sustitutivo) entre las contempladas en el artículo 58.2, en el caso de incumplimiento de diversas disposiciones el artículo 83.3 limita la cuantía total de la multa a la prevista para las infracciones más graves, que no son otras que las dispuestas en el artículo 83.5 y 6.

Asimismo, y en función de lo dispuesto en el artículo 83 apartados 4 y 5, la LOPDGDD, recoge todo un catálogo de infracciones leves, graves y muy graves; aunque sólo a efectos de prescripción:

INFRACCIONES MUY GRAVES		
Tratar datos personales vulnerando los principios y garantías del art. 5 del RGPD.	Tratar datos personales sin que concurren alguna de las condiciones de licitud del art. 6 del RGPD.	Incumplimiento requisitos del art. 7 del RGPD para la validez del consentimiento.
Uso de datos para finalidad no compatible para la que fueron recabados, sin contar consentimiento del afectado o base legal para ello.	Tratamiento de datos del art.9 del RGPD sin concurrir circunstancias de dicho precepto o del art.9 de esta ley.	Tratamiento de datos de condenas e infracciones penales o medidas de seguridad fuera de lo dispuesto en el 10 del RGPD o 10 de esta ley.
Tratamiento de datos de infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de esta ley.	Omisión del deber de informar conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 14 del RGPD y 12 de esta ley.	Vulneración del deber de confidencialidad del artículo 5 de esta ley.
Exigencia de pago de canon para facilitar la información que se refiere en los arts. 13 y 14 del RGPD, fuera de los supuestos establecidos en su art. 12.5	La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados.	Impedimento/obstaculización/no atención reiterada del ejercicio de derechos de los arts. 15 a 22 del RGPD.
Transferencia internacional de datos a destinatario de tercer país u organización internacional, sin las garantías de los arts. 44 a 49 del RGPD.	Incumplimiento de resoluciones dictadas por la autoridad de control en ejercicio de los poderes del 58.2 del RGPD.	Incumplimiento de la obligación de bloqueo del art.32 de esta ley cuando la misma sea exigible.
Resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de protección de datos.	No facilitar el acceso del personal de la autoridad de control a los datos personales, información, locales, equipos o medios de tratamiento que sean requeridos en el ejercicio de sus poderes de investigación.	

INFRACCIONES GRAVES		
Tratamiento de datos de un menor sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela.	No acreditar esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por menor de edad o titular de su patria potestad o tutela.	Incumplimiento por un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido conforme a los arts. 42 y 43 del RGPD.
Falta de adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar los principios de protección de datos desde el diseño, y no integrar garantías necesarias en el tratamiento.	Falta de adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, sólo se traten datos necesarios para cada fin, conforme al 25.2 del RGPD.	Incumplimiento de designar representante del responsable o encargado no establecido en la UE, conforme al 27 del RGPD.
Falta de atención de representante en la UE del responsable o encargado de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o los afectados.	Contratación por el responsable de un encargado que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas del capítulo IV del RGPD.	Contratación por un encargado de otros encargados sin contar la autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles.
Encargar tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido del 28.3 RGPD.	Infracción por un encargado de lo dispuesto en el RGPD y esta ley, al determinar los fines y medios del tratamiento, conforme al 28.10 del RGPD.	No poner a disposición de la autoridad de control que lo haya solicitado el registro de actividades de tratamiento.

No disponer del registro de actividades de tratamiento del art.30 del RGPD.	No cooperar con la autoridad de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos del art.72 de esta ley.	Tratamiento de datos sin previa valoración de los riesgos que pudiera generar a los derechos de los afectados, y en particular a su protección de datos, conforme al art.30 del RGPD.
Incumplimiento del deber del encargado de notificar al responsable las violaciones de seguridad.	Incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de una violación de seguridad, conforme al art. 33 del RGPD.	El tratamiento de datos sin realizar evaluación de impacto en los supuestos que sea exigible.
Incumplimiento del deber de comunicar al afectado una violación de seguridad conforme al art.34 del RGPD, si el responsable hubiese sido requerido por la autoridad de protección de datos para realizarlo.	Tratamiento de datos sin haber consultado previamente a la autoridad de control cuando sea preceptiva conforme al art.36 del RGPD o una ley establezca la obligación de realizarla.	Incumplimiento de obligación de designar delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento conforme al art.37 del RGPD y 34 de esta ley orgánica.
No posibilitar la participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos, no respaldarlo o interferir en sus funciones.	Uso de un sello o certificación de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación acreditada o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado.	Obtener acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos del art. 43 del RGPD.
Desempeño de funciones que el RGPD reserva a los organismos de certificación, sin haber sido acreditado conforme al art.39 de esta ley.	Desempeño de funciones que el art.41 del RGPD reserva a los organismos de certificación de supervisión de códigos de conducta sin haber sido acreditado por la autoridad de control.	Falta de adopción por los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de las medidas oportunas en caso de infracción del código, conforme al art.41.4 del RGPD.
Impedimento/obstaculización/no atención reitera de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento u portabilidad en tratamientos que no requieran identificación del afectado, cuando éste, haya facilitado información adicional que permita la identificación	Falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 32.1 del RGPD	El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las medidas técnicas y organizativas que se hubieren implantado conforme a lo exigidos por el artículo 32.1 del RGPD
El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 423 del RGPD		

INFRACCIONES LEVES		
Incumplimiento del principio de transparencia de la información/derecho de información por no facilitar todo lo exigido conforme arts. 13 y 14 RGPD.	No atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los arts.15 a 22 del RGPD, salvo que sea de aplicación 73.1.k) de esta ley.	Incumplimiento obligación informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se han comunicado los datos rectificados, suprimidos o limitado tratamiento.
Incumplimiento obligación de notificar la rectificación/supresión/limitación de datos exigida por el 19 RGPD.	Incumplimiento de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando sea exigible conforme al art.3 de esta ley.	No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo entre corresponsables del tratamiento, conforme al 26.2 RGPD.
No atender derechos acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad que no se requiera identificación del afectado, cuando éste haya facilitado información adicional que permita su identificación, salvo que se aplicase el art.73.c) de esta ley.	Falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo sobre obligaciones, funciones y responsabilidades y sus relaciones con los afectados, conforme al 26.2 del RGPD.	Falta del cumplimiento de la obligación del encargado de informar al responsable acerca de posible infracción por una instrucción recibida de éste de las disposiciones del RGPD o de esta ley, conforme al 28.3 del RGPD.



Incumplimiento por encargado del contrato o acto que regule el tratamiento o instrucciones del responsable, salvo que esté legalmente obligado conforme el RPDG y esta ley o supuesto que fuese necesario para evitar infracción y se hubiese advertido al responsable o al encargado.	Exigencia del pago de un canon al afectado para facilitar información exigida por arts.13 y 14 del RPDG o por atender las solicitudes de derechos de los arts.15 a 22 del RPDG cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los costes para facilitar la información o realizar la actuación solicitada.	Incumplimiento por los organismos acreditados de supervisar un código de conducta de la obligación de informar a las autoridades de control sobre las medidas en caso de infracción del código, conforme al art. 41.4 del RPDG.
Disponer un registro de actividades del tratamiento que no incorpore toda la información del art.30 del RPDG.	Incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad, exigida por el 33.5 del RPDG.	Facilitar información inexacta a la autoridad de control, en los supuestos de consulta previa, conforme al 36 del RPDG.
Notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de control de la información sobre una violación de seguridad conforme al art.33 del RPDG.	No publicar datos de contacto del delegado de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible conforme al 37 del RPDG y 34 de esta ley.	Incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la autoridad de control de la expedición, renovación o retirada de una certificación, conforme al art.43.1 y 43.5 del RPDG.
Incumplimiento del deber de comunicar al afectado una violación de seguridad que entrañe alto riesgo para derechos y libertades, conforme al 34 del RPDG, salvo que sea de aplicación el art. 73.s) de esta ley.	La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los artículos 13 y 14 del RPDG o por no atender las solicitudes de ejercicio de los derechos, cuando así lo permita el artículo 12.5, si su cuantía excediese del importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada.	El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.

Respecto a la prescripción, la LOPDGDD recoge tanto la prescripción de infracciones y sanciones, como la interrupción del plazo de prescripción de las infracciones de la siguiente forma:

- Prescripción de infracciones:
  - Leves, graves y muy graves, prescriben al año, dos años y tres años respectivamente.
- Interrupción de prescripción de infracciones:
  - La iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante **más de seis meses** por causas no imputables al presunto infractor.
  - Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del RPDG interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el interesado del proyecto de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades de control interesadas.
- Prescripción de sanciones:
  - Las que sean de importe igual o inferior a los 40.000 euros prescriben en el plazo de un año; de 40.001 a 300.000 euros a los dos años; y las que superen los 300.000 euros a los tres años.
- Cómputo y prescripción de sanciones:
  - Este plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
  - La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante **más de seis meses** por causa no imputable al infractor.

Por último, y a título de curiosidad, el artículo 83.9 del RPDG hace mención a los países de la Unión, como Dinamarca y Estonia, cuyos ordenamientos jurídicos internos no permiten el establecimiento de multas administrativas, por lo que regula que la incoación del procedimiento corresponde a la Autoridad de Control y su imposición a los tribunales nacionales competentes.



### 3.3 PODERES CORRECTIVOS DE LA AUTORIDAD DE CONTROL

Anteriormente, en el apartado de este módulo referente a las funciones y potestades que confiere el RGPD a las autoridades de control y, por ende, a la Agencia Española de Protección de Datos, ya nos referimos a los poderes que confiere al respecto el artículo

58 del RGPD y que son de investigación (art 58.1), correctivos (art 58.2) y de autorización y consultivos (art 58.3).

No obstante, el ejercicio de estos poderes estará sujeto a las garantías adecuadas, incluida la tutela judicial efectiva y al respeto de las garantías procesales, establecidas en el Derecho de la Unión y de los Estados miembros de conformidad con la Carta.

Además, el RGPD contempla en el apartado 6 del citado artículo 58 que cada Estado miembro podrá establecer por ley que su autoridad de control tenga otros poderes además de los indicados.

Respecto a los poderes correctivos del artículo 58.2 del RGPD, aunque ya se han citado en este módulo, conviene recordarlos realizando una serie de matizaciones en algunos de sus apartados.

Estos poderes correctivos, que se pueden disponer a título adicional o sustitutivo, son los siguientes:

- a) Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una **Advertencia** cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento; (ver Considerando 131).
- b) Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con **Apercibimiento** cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento.

Sobre este apercibimiento, el considerando 148 del RGPD especifica lo siguiente:

A fin de reforzar la aplicación de las normas del presente Reglamento, cualquier infracción de este debe ser castigada con sanciones, incluidas multas administrativas, con carácter adicional a medidas adecuadas impuestas por la autoridad de control en virtud del presente Reglamento, o en sustitución de estas. En caso de infracción leve, o si la multa que probablemente se impusiera constituyese una carga desproporcionada para una persona física, en lugar de sanción mediante multa puede imponerse un apercibimiento. Debe no obstante prestarse especial atención a la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, a su carácter intencional, a las medidas tomadas para paliar los daños y perjuicios sufridos, al grado de responsabilidad o a cualquier infracción anterior pertinente, a la forma en que la autoridad de control haya tenido conocimiento de la infracción, al cumplimiento de medidas ordenadas contra el responsable o encargado, a la adhesión a códigos de conducta y a cualquier otra circunstancia agravante o atenuante. La imposición de sanciones, incluidas las multas administrativas, debe estar sujeta a garantías procesales suficientes conforme a los principios generales del Derecho de la Unión y de la Carta, entre ellas el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

En la resolución de Apercibimiento se establecerán las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido. Al igual que en el caso de la Advertencia, el RGPD no limita el número de Apercibimientos a un responsable o encargado del tratamiento. Aunque la versión española del Reglamento emplea el verbo "sancionar", tanto en relación con las advertencias como respecto a los apercibimientos, este uso es consecuencia de un error en la traducción. El texto en inglés, idioma en el que fue negociado el RGPD, utiliza la expresión "issue a warning" o "issue a reprimand". El error ha sido subsanado formalmente en fechas recientes, en el marco de una revisión general de errores en las diferentes versiones lingüísticas del Reglamento, que se publicó el 4 de marzo de 2021. El término "sanción" fue cuidadosamente evitado en las discusiones sobre el Reglamento por dos motivos. En primer lugar, porque no todas las medidas correctivas que se incluyen en el artículo 58.2 tienen un carácter "punitivo". En segundo lugar, para que la aplicación de estas medidas pudiera adaptarse a las diferentes tradiciones jurídicas de los estados miembros, ya que en algunos de ellos, acciones tales como adoptar una resolución obligando a realizar el tratamiento de una forma determinada, o apercibir de la existencia de infracciones, no tienen una naturaleza sancionadora.

- c) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del presente Reglamento;
- d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado;
- e) ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales;
- f) imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición;
- g) ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tratamiento con arreglo a los artículos 16, 17 y 18 y la notificación de dichas medidas a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales con arreglo a al artículo 17, apartado 2, y al artículo 19;
- h) retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación emitida con arreglo a los artículos 42 y 43, u ordenar al organismo de certificación que no se emita una certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación;
- i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular;

Añade el Considerando 152 del RGPD:

En los casos en que el presente Reglamento no armoniza las sanciones administrativas, o en otros casos en que se requiera, por ejemplo, en casos de infracciones graves del presente Reglamento, los Estados miembros deben aplicar un sistema que establezca sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La naturaleza de dichas sanciones, ya sea penal o administrativa, debe ser determinada por el Derecho de los Estados miembros.

- j) ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional.

### 3.4 EL RÉGIMEN SANCIONADOR PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Respecto a la imposición de multas a las Administraciones públicas, el artículo 83.7 del RGPD señala lo siguiente:

Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 2, cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro.

En este sentido, la LOPDGDD prevé al respecto lo siguiente en su artículo 77:

1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados:
  - a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos.
  - b) Los órganos jurisdiccionales.
  - c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local.
  - d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
  - e) Las autoridades administrativas independientes.
  - f) El Banco de España.
  - g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público.
  - h) Las fundaciones del sector público.

- i) Las Universidades Públicas.
  - j) Los Consorcios
  - k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales.
2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido.
- La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación.
- Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.
4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.
5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo.
6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.
- Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa específica.
- Es decir, se ha optado por un sistema similar al que regulaba la derogada LOPD, no sancionando con multas pecuniarias a las Administraciones públicas que infrinjan la normativa de protección de datos, sino utilizar la vía del apercibimiento que hemos analizado anteriormente.